

**DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN ANDALUCÍA (pp. 2-5)**

—

**DRET I POLÍTIQUES AMBIENTALS A ANDALUSIA (pp. 6-9)**

ABEL LA CALLE

*Profesor asociado de Derecho Internacional Público / Professor associat de Dret*

*Internacional Públic*

*Universidad de Almería*

—

*Abogado / Advocat*

En primer lugar, debo referirme a las disposiciones siguientes: Resolución de 1 de julio de 2011, de la Dirección General del Agua, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la que se encomienda a esta la gestión en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos correspondientes a las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren íntegramente por el territorio de la Comunidad Autónoma (<http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/07/pdfs/BOE-A-2011-11693.pdf>); Acuerdo de 14 de junio de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se crea un grupo de personas expertas para el asesoramiento en el modelo de gestión del Guadalquivir en Andalucía (<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/d41.pdf>), y Resolución de 20 de octubre de 2011, de la Dirección General del Agua, por la que se publica el acuerdo de prórroga del Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el que se encomienda a esta la gestión en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos correspondientes a las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren íntegramente por el territorio de la Comunidad Autónoma (<http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/07/pdfs/BOE-A-2011-17535.pdf>).

El carácter menor de estos acuerdos determinaría normalmente que no fueran objeto de atención en una crónica legislativa; no obstante, tiene interés señalar el estado de la cuestión de un asunto nada menor como es la gestión del Guadalquivir.

La interpretación y aplicación de la atribución de competencias en materia de aguas de la Constitución española de 1978 es un tema jurídico y político de gran interés. Ha tenido dos momentos álgidos, el primero en 1985, con motivo de la aprobación de la Ley de Aguas (Ley 29/1985), y el segundo actualmente, con motivo de las modificaciones estatutarias que introducen una nueva regulación de las competencias autonómicas en materia de aguas. En su base está una norma de redacción ambigua (artículo 149.1.23) y unos intereses encontrados que usan sendas interpretaciones incompatibles.

La gestión del Guadalquivir fue objeto de una atribución exclusiva en la modificación del Estatuto de Autonomía de Andalucía (artículo 51 de la Ley Orgánica 2/2007), un traspaso de medios (Real Decreto 1666/2008) y una asignación autonómica de funciones, medios y servicios (Decreto 66/2011). Todas estas disposiciones fueron recurridas y anuladas (sentencias del Tribunal Constitucional 30/2011, de 16 de marzo, y del Tribunal Supremo, de 13 y 14 de junio de 2011). Los Gobiernos del Estado y de la

Comunidad Autónoma de Andalucía acordaron una encomienda de gestión temporal mientras buscaban otra solución jurídica (seis meses a través del Convenio de colaboración de 7 de abril de 2011 y quince días más con el Acuerdo de prórroga de 7 de octubre de 2011). En tanto ambos Gobiernos han adoptado algunas medidas al respecto. El Gobierno andaluz se hizo asesorar por un grupo de expertos (Acuerdo de 14 de junio de 2011) y a través del Grupo Parlamentario Socialista presentó el 3 de agosto de 2011 una iniciativa (8-11/PPPL-000001) para la delegación de las competencias (art. 150.2 de la CE) anuladas; posteriormente obtuvo el dictamen favorable con voto particular del Consejo Consultivo de Andalucía (Dictamen 723, de 10 de noviembre de 2011, no publicado aún). El Gobierno del Estado, por su parte, aprobó “conferir” el ejercicio de la competencia ejecutiva sobre las facultades de policía de dominio público hidráulico dentro de su ámbito territorial (Real Decreto-Ley 12/2011). Transcurrido el plazo de la encomienda de gestión sin ningún acuerdo, se ha procedido a reintegrar en la Administración general del Estado los medios objeto de traspaso (Real Decreto 1498/2011).

Las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011 han otorgado la mayoría absoluta al Partido Popular, lo que formalmente facilita la adopción de decisiones en esta materia, si bien es difícil que pueda preverse la dirección que va a tomar el asunto hasta que no tengan lugar los cercanos comicios autonómicos en Andalucía.

Por otro lado, debo referirme al Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía ([http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/calidad\\_aire.pdf](http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/calidad_aire.pdf)), disposición que tiene como objeto regular la calidad del medio ambiente atmosférico y crear el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía para prevenir, vigilar y reducir la contaminación atmosférica. Desarrolla parcialmente la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.

El Decreto tiene tres capítulos y anejos que estructuran su contenido. El primer capítulo está dedicado a las disposiciones generales; el segundo, a la red de vigilancia y control de la calidad del aire, y el tercero, a la autorización de emisiones a la atmósfera.

Como elemento fundamental de la red de vigilancia y control de la calidad del aire, la disposición regula un registro que incluye los sistemas de evaluación de la calidad del aire públicos y privados. Los citados sistemas de la Junta de Andalucía deben inscribirse y aquellos privados que se hayan establecido por exigencia de la autorización correspondiente tienen la obligación de solicitar su inscripción.

Es llamativo que la disposición aplaze el establecimiento de los circuitos de información necesarios para la ejecución de las actividades estadísticas, que, cabría pensar, es uno de los principales motivos de la existencia de la red.

En lo que respecta a la autorización de emisiones a la atmósfera, se establece el ámbito de aplicación, el procedimiento, la resolución y su modificación, renovación, revisión y caducidad.

La autorización es exigible a las instalaciones que emitan contaminantes que estén sujetos a cuotas de emisión en virtud de las obligaciones comunitarias e internacionales asumidas por el Estado español —en especial, la emisión de gases de efecto invernadero— y a las instalaciones no sujetas a autorización ambiental integrada o a autorización ambiental unificada en las que se desarrollen actividades pertenecientes a los grupos A y B del catálogo recogido en el anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero.

Finalmente, hay que mencionar las disposiciones siguientes: el Acuerdo de 2 de noviembre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba inicialmente el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalete y Barbate (<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/guadalete.pdf>); el Acuerdo de 2 de noviembre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba inicialmente el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas ([http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/cuenca\\_mediterranea.pdf](http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/cuenca_mediterranea.pdf)); el Acuerdo de 2 de noviembre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba inicialmente el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras (<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/tinto.pdf>). Estos acuerdos del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía concluyen

la fase autonómica del procedimiento de planificación hidrológica de las demarcaciones internas o intracomunitarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Los acuerdos aprueban inicialmente los planes hidrológicos de demarcación “sin perjuicio de las actuaciones que corresponda realizar a la Administración General del Estado”, de esta forma remiten a la aprobación (definitiva) del Consejo de Ministros.

Los planes hidrológicos de demarcación hidrográfica para el período 2009-2015 deberían haberse aprobado y publicado antes del 22 de diciembre de 2009 conforme al derecho comunitario (Directiva 2000/60/CE), pero hasta la fecha solo se ha aprobado el Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña (Decreto 188/2010 y Real Decreto 1219/2011), retraso que ha ocasionado que la Comisión Europea interponga demanda de infracción frente a España.

El contenido de los planes no se publica en el BOJA, pero se puede acceder a él en sede administrativa o en la página web de la Administración autonómica.

En primer lloc, he de referir-me a les disposicions següents: a la Resolució d'1 de juliol de 2011, de la Direcció General de l'Aigua, per la qual es publica el Conveni de col·laboració amb la Comunitat Autònoma d'Andalusia, per la qual s'encomana a la Comunitat Autònoma d'Andalusia la gestió en matèria de recursos i aprofitaments hidràulics corresponents a les aigües de la conca del Guadalquivir que discorren íntegrament pel territori de la comunitat autònoma (<<http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/07/pdfs/BOE-A-2011-11693.pdf>>); a l'Acord de 14 de juny de 2011, del Consell de Govern, pel qual es crea un grup de persones expertes per a l'assessorament en el model de gestió del Guadalquivir a Andalusia (<<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/d41.pdf>>); i a la Resolució de 20 d'octubre de 2011, de la Direcció General de l'Aigua, per la qual es publica l'acord de pròrroga del conveni de col·laboració amb la Comunitat Autònoma d'Andalusia, pel qual s'encomana a la Comunitat Autònoma d'Andalusia la gestió en matèria de recursos i aprofitaments hidràulics corresponents a les aigües de la conca del Guadalquivir que discorren íntegrament pel territori de la comunitat autònoma (<<http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/07/pdfs/BOE-A-2011-17535.pdf>>).

El caràcter menor d'aquests acords determinaria normalment que no fos objecte d'atenció en una crònica legislativa; no obstant això, cal assenyalar l'estat de la qüestió d'un assumpte gens menor com és la gestió del Guadalquivir.

La interpretació i l'aplicació de l'atribució de competències en matèria d'aigües de la Constitució espanyola de 1978 és un tema jurídic i polític de gran interès. Ha tingut dos moments àlgids: el 1985, amb motiu de l'aprovació de la llei d'aigües (Llei 29/1985), i el segon, actualment, amb motiu de les modificacions estatutàries que introdueixen una nova regulació de les competències autonòmiques en matèria d'aigües. En la base hi ha una norma de redacció ambigua (article 149.1.23) i interessos trobats que utilitzen sengles interpretacions incompatibles.

La gestió del Guadalquivir va ser objecte d'una atribució exclusiva en la modificació de l'Estatut d'autonomia d'Andalusia (article 51 de la Llei orgànica 2/2007), el traspàs de mitjans (Reial decret 1666/2008) i l'assignació autonòmica de funcions, mitjans i serveis (Decret 66/2011). Ambdós actuacions van ser recorregudes i anul·lades (Sentència del Tribunal Constitucional 30/2011, de 16 de març, i sentències del Tribunal Suprem de 13 i 14 de juny de 2011). Els governs de l'Estat i de la Comunitat

Autònoma d'Andalusia van acordar un encàrrec de gestió temporal mentre buscaven una altra solució jurídica (sis mesos a través del Conveni de col·laboració de 7 d'abril de 2011 i quinze dies més amb l'Acord de pròrroga de 7 d'octubre de 2011). Mentrestant ambdós governs han adoptat algunes mesures respecte d'això. El Govern andalús es va fer assessorar per un grup d'experts (Acord de 14 de juny de 2011), a través del Grup Parlamentari Socialista el 3 d'agost de 2011 va presentar una iniciativa (8-11/PPPL-000001) per a la delegació de les competències (article 150.2 de la CE) anul·lada i ha obtingut el dictamen favorable amb vot particular sobre això del Consell Consultiu d'Andalusia (Dictamen 723 de 10 de novembre de 2011, encara no publicat). El Govern de l'Estat, per la seva banda, va aprovar "conferir" l'exercici de la competència executiva sobre les facultats de policia de domini públic hidràulic en el seu àmbit territorial (Reial decret llei 12/2011). Transcorregut el termini de l'encàrrec de gestió sense cap acord sobre una altra solució, s'han reintegrat els mitjans objecte de traspàs a l'Administració General de l'Estat (Reial decret 1498/2011).

Les eleccions generals del 20 de novembre de 2011 han atorgat majoria absoluta al Partit Popular, la qual cosa formalment facilita l'adopció de decisions en aquesta matèria, però és difícil que pugui preveure's la direcció que agafarà l'assumpte fins que no tinguin lloc els pròxims comicis autonòmics a Andalusia.

D'altra banda, he de referir-me al Decret 239/2011, de 12 de juliol, pel qual es regula la qualitat del medi ambient atmosfèric i es crea el Registre de Sistemes d'Avaluació de la Qualitat de l'Aire a Andalusia (<<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/calidad aire.pdf>>), disposició que estableix la regulació de la qualitat del medi ambient atmosfèric i la creació del Registre de Sistemes d'Avaluació de la Qualitat de l'Aire a Andalusia per prevenir, vigilar i reduir la contaminació atmosfèrica. Desplega parcialment la Llei 7/2007, de 9 de juliol, de gestió integrada de la qualitat ambiental, i la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.

El Decret té tres capítols i annexos que n'estructuren el contingut. El primer capítol està dedicat a les disposicions generals, el segon a la xarxa de vigilància i control de la qualitat de l'aire i el tercer a l'autorització d'emissions a l'atmosfera.

Com a element fonamental de la xarxa de vigilància i control de la qualitat de l'aire, la disposició regula el registre que inclou els sistemes d'avaluació de la qualitat de l'aire

públics i privats. Els sistemes esmentats de la Junta d'Andalusia han d'inscriure's i els privats que s'hagin establert per exigència de l'autorització corresponent tenen l'obligació de sol·licitar la inscripció.

Crida l'atenció que la disposició difereixi en el temps l'establiment dels circuits d'informació necessaris per a l'execució de les activitats estadístiques que sobre aquesta matèria, caldria pensar que és un dels principals motius de l'existència de la xarxa.

Pel que fa a l'autorització d'emissions a l'atmosfera, estableix l'àmbit d'aplicació, el procediment, la resolució i la modificació, la renovació, la revisió i la caducitat.

L'autorització és exigible a les instal·lacions que emetin contaminants que estiguin subjectes a quotes d'emissió en compliment de les obligacions comunitàries i internacionals assumides per l'Estat espanyol, en especial, l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle i a les instal·lacions no subjectes a autorització ambiental integrada o a autorització ambiental unificada, en les quals s'hi duguin a terme algunes de les activitats incloses en el catàleg que recull l'annex del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, i que figuren en aquest annex com a pertanyents als grups A i B.

Finalment, cal esmentar les disposicions següents: l'Acord de 2 de novembre de 2011, del Consell de Govern, pel qual s'aprova inicialment el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica del Guadalete i Barbate (<<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/guadalete.pdf>>); l'Acord de 2 de novembre de 2011, del Consell de Govern, pel qual s'aprova inicialment el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Conques Mediterrànies Andalusès (<[http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/cuenca\\_mediterranea.pdf.mediterranea.pdf](http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/cuenca_mediterranea.pdf.mediterranea.pdf)>); l'Acord de 2 de novembre de 2011, del Consell de Govern, pel qual s'aprova inicialment el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica del Tinto, Odiel i Piedras (<<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/tinto.pdf>>). Aquests acords del Consell de Govern de la Junta d'Andalusia conclouen la fase autonòmica del procediment de planificació hidrològica de les demarcacions internes o intracomunitàries de la Comunitat Autònoma d'Andalusia.



Els acords aproven inicialment els plans hidrològics de demarcació “*sin perjuicio de las actuaciones que corresponda realizar a la Administración General del Estado*”, d’aquesta manera remetent a l’aprovació [definitiva] del Consell de Ministres.

Els plans hidrològics de demarcació hidrogràfica per al període 2009-2015 haurien d’haver-se aprovat i publicat abans del 22 de desembre de 2009 conforme al dret comunitari (Directiva 2000/60/CE), però, fins als acords esmentats, només s’havia aprovat el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (Decret 188/2010 i Reial decret 1219/2011), retard que ha ocasionat que la Comissió Europea interposi una demanda d’infracció davant d’Espanya.

El contingut dels plans no es publica al BOJA, la seva publicitat es remet a la consulta en seu administrativa i al web de l’Administració autonòmica.